

Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL RECIBIR DEL CENTER FOR
DEMOCRACY LA MEDALLA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA 1993

SANTIAGO, 10 de Enero de 1994.

Señoras y señores:

Como ustedes comprenderán, recibo con honda emoción este honor que me conmueve profundamente, y mis palabras son de gratitud para el Centro por la Democracia, para el Presidente Clinton, que ha enviado este mensaje de apoyo y de respaldo, para los señores Kelly y Weinstein por sus palabras tan generosas, para Andrés Allamand, cuyas palabras me han conmovido profundamente, para mi viejo amigo Genaro Arriagada. Gracias a todos.

Es para mí un gran honor la distinción con que me honra el Centro para la Democracia. La recibo, con mucha emoción y gratitud, como un homenaje al pueblo chileno, por la forma como ha sabido reconquistar y consolidar su democracia.

Valorizo altamente esta Medalla Internacional de la Democracia, no sólo por su alto significado como reconocimiento y premio a un chileno que ha tenido la suerte y el honor de encabezar el proceso histórico de restablecimiento de la democracia en nuestra Patria, sino también por el alto estímulo que su otorgamiento importa para todos los líderes que en el mundo luchan por la causa de la libertad y de la democracia.

La importante labor que a favor de esta causa realiza el Centro para la Democracia es un ejemplo que merece el reconocimiento de todos los demócratas. Sus esfuerzos desinteresados y suprapartidistas, inspirados en los grandes valores de la tradición histórica de los Estados Unidos de América, para promover y fortalecer las instituciones democráticas en todo el mundo, para estimular el diálogo en situaciones de conflicto y para ayudar a las naciones en proceso de desarrollo de sus sistemas democráticos a consolidarlos y perfeccionarlos, son un aporte generoso y constructivo en favor de los pueblos que luchan por conquistar o por asegurar su libertad.

Sin duda es justo motivo de satisfacción para los chilenos el éxito que hemos logrado en esa lucha: el pueblo chileno vive en paz, bajo un Estado de Derecho que garantiza a todos la plena vigencia de los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades públicas; las iglesias, los partidos políticos y las organizaciones sociales desarrollan sus actividades con autonomía; nadie -salvo los delincuentes- tiene motivo razonable para temer al Estado ni a sus autoridades; nuestra economía progresa, el producto nacional y por habitante crece sostenidamente, las inversiones aumentan, disminuyen la inflación y la desocupación; mejora la condición de los trabajadores, entre éstos y los empresarios impera un clima de entendimiento y cooperación. Y aunque la pobreza aflige a gran parte de la población nacional, disminuye substancialmente el número de pobres y, sobre todo, la miseria extrema. Chile se ha reinsertado plenamente en el mundo internacional, aumenta y mejora sus relaciones externas y goza de prestigio entre las naciones.

A poco de cumplirse el período de cuatro años de este primer gobierno democrático que he tenido la responsabilidad de encabezar, el pueblo ha elegido libremente -en un proceso electoral caracterizado por su corrección y por la alta participación de los ciudadanos- al nuevo Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y a los nuevos miembros del Congreso Nacional, otorgando su respaldo mayoritario a las propuestas de los Partidos de la Concertación por la Democracia, lo que implica un respaldo a la gestión del actual gobierno y la voluntad de seguir avanzando en la misma línea.

¿Cómo se explican estos resultados?

Existe una tendencia natural atribuir los éxitos y los fracasos de las naciones a los gobernantes que las dirigen. Esto es cierto sólo a veces y en alguna medida. El balance final de un gobierno depende tanto de la calidad y acierto de quienes lo conducen como de las circunstancias favorables o adversas en que le toca actuar. La historia muestra que el gobernante más responsable, capaz y aún genial, puede fracasar si se encuentra con obstáculos y dificultades insuperables; el más mediocre puede tener éxito si los acontecimientos le son favorables.

He procurado, en conciencia, dilucidar a qué se debe, fundamentalmente, el balance tan favorable de nuestro proceso, y concluyo que es fruto de múltiples aportes: sin duda yo y mis colaboradores hemos contribuido; pero también lo han hecho los partidos políticos -de gobierno y de oposición-, las organizaciones sociales, las instituciones del Estado y la comunidad nacional en su conjunto.

¿Cuál ha sido, fundamentalmente, mi aporte personal?

Yo diría que, en primer lugar, haber sabido interpretar los anhelos más profundos e íntimos de la mayoría de los chilenos.

Después de largos años de apasionadas confrontaciones de intereses e ideologías contradictorias, que llevaron al país al quiebre de su institucionalidad democrática y a la división de su gente en "amigos y enemigos", llegó el momento en que el anhelo de la paz se convirtió en la más sentida aspiración de la gran mayoría de nuestros compatriotas.

Ante esta realidad, la búsqueda de la unidad nacional en que mi gobierno se empeñó desde el primer día, expresada en nuestra política de reconciliación y en el permanente esfuerzo por procurar acuerdos o consensos, constituyó un estilo político nuevo en los últimos treinta años de la vida nacional, que correspondió acertadamente al estado de ánimo de los chilenos.

Creo que el apoyo generalizado a esta manera de actuar fue posible porque interpretó esa disposición al reencuentro que prevalece en la sociedad nacional y, al mismo tiempo, porque mis compatriotas entendieron que no se trataba meramente de una estrategia pragmática u oportunista, sino de un estilo de hacer política que nunca se ha apartado de la verdad, ni ha dejado de mano los valores fundamentales que constituyen mis más profundas convicciones. El país sabe que el respeto a la verdad y a la dignidad de las personas, la búsqueda de libertad y de justicia, el espíritu de solidaridad y el amor a Chile, han inspirado permanentemente nuestra conducta.

Y, sin duda, ha contribuido al éxito logrado nuestro claro reconocimiento de que en política -como en todas las cosas de la vida- no se puede tener todo lo que se quiere: las circunstancias nos limitan; los ideales deben conciliarse con la realidad, todo lo cual exige el ejercicio de la prudencia, que hemos puesto en práctica sin sacrificar jamás la consecuencia, ni el coraje cuando ha sido necesario.

Otro factor que creo puede haberme ayudado en la consideración de mis compatriotas y en mi gestión de gobernante es el hecho de que el ejercicio del poder no me haya envanecido. Los chilenos saben que en todo momento he tratado de cumplir el propósito que enuncié al asumir la Presidencia de la República, en mi discurso del Estadio Nacional: procurar ser para todos "como un buen padre de familia, que pone su mayor diligencia, abnegación y autoridad en labrar el bienestar y felicidad de su gente, preocupándose especialmente de los que más lo necesitan, en este caso, de los más pobres y humildes".

Finalmente, tengo la certeza de que ha sido fundamental para el éxito de nuestra gestión gubernativa el que hayamos sabido trabajar en equipo con mis colaboradores. He comprobado que la labor de un gobernante es como la de un director de orquesta, que orienta y armoniza el trabajo que ejecuta su equipo. Es esta ocasión propicia para expresar mi profundo y público reconocimiento a todos lo que conmigo han trabajado en esta hermosa tarea, especialmente a quienes me han acompañado como Ministros y a quienes laboran diariamente más cerca de mí. Ellos

merecen, tanto como yo, la distinción con que me honra el Centro para la Democracia.

Sin embargo, nada de esto explica suficientemente, en mi concepto, el éxito que hemos obtenido. Hay otros factores de mucha importancia que es justo señalar.

Desde luego, el clima político de desideologización que ha vivido el mundo en los últimos años facilitó la práctica de la estrategia de los consensos, que habría sido imposible de imaginar siquiera en una realidad internacional como la de los años 60 y 70, marcada por la guerra fría, la bipolaridad y la consiguiente intransigencia de las corrientes en lucha. El derrumbe del muro de Berlín y de los llamados socialismos reales, junto con dejar a muchos sin banderas, creó las condiciones para que en la vida política una mayor racionalidad reemplazara a la tremenda carga pasional que caracterizó al período precedente.

Este cuadro mundial facilitó, entre nosotros, el reencuentro de los chilenos con nuestras más profundas tradiciones históricas, que han caracterizado la vida nacional durante toda su trayectoria como Estado independiente, con contadas excepciones o rupturas, como lo fue la guerra civil del 91 y la tragedia vivida en el decenio de los 70, con la ruptura del orden constitucional, la dictadura y sus consecuencias.

Esas tradiciones, que expresan en cierto modo formas de ser y de actuar de los chilenos, configuran lo que el Cardenal Silva Henríquez -varón justo, sabio, valiente y bueno al que tanto debemos- describió hermosamente como "el alma de Chile": el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión, la primacía de la fe sobre cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones divergentes y la tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales.

Fruto y expresión de estos rasgos de la idiosincrasia nacional es nuestra tendencia a la institucionalización de la sociedad, manifestada desde el nacimiento de la República en normas constitucionales y legales que, a diferencia de lo ocurrido en otras partes, no se han quedado en hermosas declaraciones de principios, que rara vez se cumplen, sino que se han concretado en la existencia de instituciones arraigadas en la conciencia colectiva, con real gravitación en la vida nacional. Los Poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración Pública, no han sido en Chile meras realidades de facto, sino entidades consagradas y reguladas por el Derecho, con competencias jurídicamente delimitadas, con vocación de servicio público y, consiguientemente, con ascendiente y prestigio en la población.

Estas peculiaridades del "alma nacional" han influido, sin duda, en todos nuestros procesos históricos, incluso en la propia dictadura y en la forma como los chilenos recuperamos nuestra democracia. No es ésta la ocasión para entrar en explicaciones detalladas que avalen esta tesis; permítaseme referirme sólo a

algunos hechos relevantes:

1° Aunque nada justifica las violaciones a los derechos humanos y demás abusos cometidos por la dictadura, que la recta conciencia moral condena y la comunidad internacional repudió, no puede desconocerse el hecho -en cierto modo paradójal- de que teniendo el régimen militar la totalidad del poder en sus manos haya elaborado e implantado una Constitución que, de un modo u otro, reguló y limitó el ejercicio de ese poder, hasta el extremo de abrir las puertas para su propio fin antes de lo que sus detentadores querían y esperaban. Ello sólo se explica como reconocimiento de la necesidad de buscar legitimación ante la conciencia jurídica del pueblo chileno, por naturaleza apegado al derecho;

2° A diferencia de lo que generalmente ocurre con las dictaduras, el régimen militar chileno no fue derribado por un levantamiento popular ni cayó por su desintegración interna; fue derrotado en las urnas por la expresión libre del pueblo en el plebiscito de Octubre de 1988, instancia establecida en la propia institucionalidad autoritaria. Como entonces dijimos quienes propusimos ese camino, los demócratas derrotamos al autoritarismo en su propia cancha; y

3° Reconocido el triunfo democrático por quienes entonces detentaban el poder, vino un proceso de negociaciones para hacer posible y facilitar su transferencia, fruto de las cuales fue la reforma constitucional aprobada por los chilenos en el plebiscito de Julio de 1989. Ello implicó, en el fondo, para ambas partes, un acto de realismo político y de voluntad conciliadora: por una parte, los triunfadores legitimamos implícitamente, con las consiguientes limitaciones que ello significa, la Constitución de 1980, que ya habíamos aceptado al concurrir al plebiscito; por otra, quienes tenían la fuerza para permanecer en el poder se sometieron al derecho y acataron la voluntad popular.

Estos antecedentes explican las particularidades excepcionales y el carácter atípico de la transición chilena a la democracia, que en el exterior a muchos cuesta comprender. Quienes, por la presencia del General Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército, imaginan que en Chile hay un sistema de "poder compartido" o "cohabitación", no entienden nada de lo que realmente ocurre. Lo cierto es que en Chile, desde el día mismo que asumimos, el 11 de Marzo de 1990, el poder político reside en los órganos constitucionales propios de toda democracia: el Presidente de la República y el Congreso Nacional, elegidos libremente por el pueblo, sin perjuicio de las atribuciones del Poder Judicial y de las limitaciones propias de cualquier régimen constitucional. Las Fuerzas Armadas, incluso el Comandante en Jefe del Ejército, son obedientes y están subordinados al Jefe del Estado; así lo prescribe la institucionalidad vigente y así ha ocurrido en la realidad.

En otro orden de cosas, si bien la vigencia de una ley de

amnistía ha impedido individualizar y condenar a los culpables de cruentas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen dictatorial -lo que golpea a la conciencia de muchos demócratas en Chile y en el mundo- no es menos cierto que el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación esclareció ante la faz del mundo la verdad de lo ocurrido y las leyes y medidas dictadas y puestas en práctica como formas de reparación a las víctimas, así como los logros de algunos procesos judiciales, han concretado la voluntad de alcanzar la mayor justicia posible.

En este orden de cosas, es necesario recordar que la experiencia universal demuestra que muy pocas veces en la historia, después de regímenes dictatoriales, se ha castigado realmente a los culpables de sus atropellos. Las propias circunstancias, el tiempo transcurrido y el ánimo de reconciliación y paz, han conducido generalmente a soluciones de amnistía o de perdón.

No seríamos justos si omitiéramos referirnos, como otras circunstancias que han contribuido al éxito que se reconoce al proceso de transición hacia la democracia que hemos vivido en Chile, a la conducta responsable y madura de los principales actores políticos y sociales.

Para mi gobierno ha sido de un valor inapreciable el apoyo leal y disciplinado que ha recibido, permanentemente, de los Partidos que forman la Concertación por la Democracia y que constituyen su base de sustentación política. Respetuosos del carácter suprapartidario del gobierno y demostrando gran comprensión de su responsabilidad histórica, han colaborado a las políticas y tareas gubernativas con ejemplar lealtad y espíritu unitario. Es ésta ocasión propicia para reiterarles mi profunda gratitud.

También son dignos de señalarse la altura de miras y la buena disposición con que, por regla general, han actuado los principales partidos opositores, lo que ha hecho posible materializar en muchos casos la política de consensos que hemos preconizado. Me complace reconocerlo y agradecerlo como un aporte importante a la reconciliación y al progreso nacional.

Esta actitud positiva de los sectores políticos se ha expresado, principalmente, en el despacho de importantes leyes en el Congreso Nacional, que han sido fruto de acuciosos estudios y, en muchos casos, del esfuerzo que se ha hecho, por senadores y diputados, para lograr acuerdos constructivos.

También merece destacarse la actitud positiva de las organizaciones sociales, muy especialmente del mundo sindical y, sobre todo, de la Central Unitaria de Trabajadores. Al restablecerse la democracia era previsible que los trabajadores chilenos, cuya condición de vida sufrió graves deterioros durante el régimen anterior -por la pérdida de derechos, la merma de remuneraciones y la persecución a sus dirigentes- quisieran usar

la libertad para reivindicar de inmediato todas sus legítimas aspiraciones, creando un conflictivo clima de convulsión social.

No fue así. Con gran sentido de responsabilidad histórica plantearon sus demandas en términos realistas, que hicieron posible conciliar sus justos derechos con las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional. Su conducta seria y patriótica, demostrativa de una madurez que es motivo de justa satisfacción nacional, compromete la gratitud de los chilenos.

Para nadie es un misterio que el sector empresarial recibió la asunción del gobierno democrático con indisimulada desconfianza. Sus simpatías estaban con el régimen autoritario, que liberalizó los mercados, privatizó muchas empresas y garantizaba disciplina social. Consecuentes con nuestros reiterados planteamientos de que mantendríamos lo bueno, corregiríamos lo malo y procuraríamos mejorar lo regular, mi gobierno se empeñó en una política, que llamamos de "crecimiento con equidad", que junto con mantener el libre mercado, cuidar los equilibrios macroeconómicos e intensificar la apertura de Chile al comercio internacional, recogiendo los aportes del gobierno anterior, implantó criterios de justicia social para superar la pobreza, mejorar la condición de los trabajadores y proteger a los sectores más postergados.

Al comprobar que el gobierno los ha considerado, siempre dispuesto a dialogar con ellos, y que la política puesta en práctica ha mantenido la estabilidad y el crecimiento y ha generado importantes aumentos de inversión, el mundo de los empresarios ha ido mejorando progresivamente su disposición a colaborar con las autoridades y hemos llegado a tener una relación amistosa y constructiva.

Especial significación tiene, en este orden de cosas, el hecho de que en los cuatro años de este período la Confederación de la Producción y del Comercio, la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno, hayamos convenido acuerdos para regular las bases de la política de remuneraciones.

Finalmente, creo justo señalar que, en mi concepto, también ha contribuido a facilitar nuestro proceso de consolidación democrática la conducta profesional, disciplinada y al margen de consideraciones de carácter político que -salvo dos lamentables episodios, vinculados principalmente al doloroso tema del esclarecimiento y sanción de las violaciones a derechos humanos- han observado las Fuerzas Armadas y de Orden, incluso el señor Comandante en Jefe del Ejército.

De esta ya larga exposición resulta que, como lo dije en un comienzo, el éxito de la transición de Chile a la Democracia es un mérito que no sólo corresponde al Gobierno que he tenido la satisfacción de encabezar, sino a todo el pueblo chileno. Este es el que merece la distinción con que hoy me honra el Centro para la

Democracia. Por eso la recibo y la agradezco en nombre de mi pueblo.

No debo terminar estas palabras sin expresar mi convicción de que, aunque es importante y meritorio el proceso de recuperación democrática que hemos vivido en Chile, no podemos contentarnos con lo alcanzado hasta aquí. Creo que la democracia que hemos reconstruido es sólida y estable, pero -como toda obra humana- necesita perfeccionamientos y no está libre de riesgos.

El programa de mi gobierno contemplaba algunas reformas institucionales que no concitaron el apoyo necesario para su despacho. Ellas figuran también en el programa del nuevo Gobierno. Confío en que éste tenga mejor suerte y consiga aunar las voluntades que hagan posible lograr su aprobación.

Pero, sobre todo, me preocupa la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza. A pesar de los importantes logros de estos años, que son motivo de legítima satisfacción, queda en este campo demasiado por hacer. Sería peligroso que los éxitos obtenidos nos indujeran a un estado anímico de complacencia. No podemos dejarnos ganar por lo que se ha llamado la "cultura de la satisfacción", generada en la ceguera en que el consumismo y el egoísmo precipitan a los que viven bien, que les vela los ojos para ver la realidad de los muchos que viven mal. Ninguna democracia será sólida y estable en una sociedad en que no imperen la justicia social y la solidaridad.

Estoy cierto que el Centro para la Democracia así lo comprende y hago votos porque todos los demócratas del mundo aunemos esfuerzos para suprimir la pobreza extrema y lograr la equidad social, como base indispensable para fortalecer la democracia a que tanto queremos.

Muchas Gracias.

* * * * *

SANTIAGO, 10 de Enero de 1994
MLS/EMS.